

Cargado en julio 2009 por Lorenzo Cotino Hueso www.cotino.es, para www.derechotics.com / www.documentostics.com , Red de especialistas en Derecho de las Nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación, www.derechotics.com

Décision n° 2009-580 DC du 10 juin 2009, Conseil constitutionnel, Loi favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet

Decisión nº 2009-580 de 10 de junio de 2009 del Consejo Constitucional francés por la que se declara inconstitucional la Ley que favorece la difusión y la protección de la creación en internet, en concreto, declarando inconstitucionales diversas modificaciones del Código de la Propiedad Intelectual, como consecuencia de los artículos 5 y 11 de la ley.

Contenido

Resumen (por Lorenzo Cotino Hueso)	2
Enlace a Decisión Consejo Constitucional	4
Comunicado de Prensa (francés)	4
Comunicado de prensa (español Google)	5
Texto completo Decisión (francés)	7
Texto completo Decisión (español Google)	16
Enlace al texto de la Ley enjuiciada	24

Resumen (por Lorenzo Cotino Hueso)

El Consejo señala las posibilidades de atribuir facultades sancionadoras a autoridades administrativas con el fin de preservar intereses protegibles como lo hace la ley. No obstante, considera que la libertad de expresión incluye el derecho de acceder a los servicios de internet, dado “su desarrollo generalizado” y “la importancia de estos servicios para la participación en la vida democrática y la expresión de ideas y opiniones”¹.

Asimismo se tiene en cuenta “que la competencia de la autoridad administrativa no se limita a una categoría particular de personas, sino que se extiende a toda la población y que sus competencias pueden llevar a restringir el ejercicio por cualquier persona, su derecho a expresarse y comunicarse libremente, sobre todo desde su casa” (nº 16). Sobre esta base, una autoridad administrativa y no judicial no puede aplicar sanciones que supongan una restricción de la libertad de expresión, sino que sólo lo puede hacer un juez².

De igual modo, se considera inconstitucional la ley por establecer el principio de presunción de culpabilidad, y no de presunción de inocencia. Ello es así porque la ley somete al abonado de la línea de conexión de internet la obligación de probar que no es él quien ha cometido la vulneración de los derechos de autor³.

¹ 12. Considerando que en virtud del artículo 11 de la Declaración sobre los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789: “La libre comunicación de pensamientos y opiniones es uno de los más preciosos derechos del hombre: todo ciudadano puede, por tanto, hablar, escribir e imprimir libremente, salvo para responder a los abusos de esta libertad en los casos determinados por la ley “que los actuales medios de comunicación y teniendo en cuenta el desarrollo generalizado de los servicios de comunicación al público línea y la importancia de estos servicios para la participación en la vida democrática y la expresión de ideas y opiniones, este derecho incluye la libertad de acceder a estos servicios;

12. Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : “ La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme : tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi “ ; qu'en l'état actuel des moyens de communication et eu égard au développement généralisé des services de communication au public en ligne ainsi qu'à l'importance prise par ces services pour la participation à la vie démocratique et l'expression des idées et des opinions, ce droit implique la liberté d'accéder à ces services ;

² 16. Considerando que los poderes de sanción impuestas por las disposiciones facultan a la comisión encargada de proteger los derechos, que no es un tribunal, para restringir o impedir el acceso a Internet de suscripción y los titulares de las personas que son elegibles y que la competencia de la autoridad administrativa no se limita a una categoría particular de personas, sino que se extiende a toda la población y que sus competencias pueden llevar a restringir el ejercicio por cualquier persona, su derecho a expresarse y comunicarse libremente, sobre todo desde su casa y que, en estas circunstancias, teniendo en cuenta la naturaleza de la libertad garantizada por el artículo 11 de la Declaración de 1789, el legislador no puede, sea cual sea salvaguardias que rigen la imposición de sanciones, encomendar dichas facultades a una autoridad administrativa con el fin de proteger los derechos de los titulares de los derechos de autor y derechos conexos;

16. Considérant que les pouvoirs de sanction institués par les dispositions critiquées habilitent la commission de protection des droits, qui n'est pas une juridiction, à restreindre ou à empêcher l'accès à internet de titulaires d'abonnement ainsi que des personnes qu'ils en font bénéficiaire ; que la compétence reconnue à cette autorité administrative n'est pas limitée à une catégorie particulière de personnes mais s'étend à la totalité de la population ; que ses pouvoirs peuvent conduire à restreindre l'exercice, par toute personne, de son droit de s'exprimer et de communiquer librement, notamment depuis son domicile ; que, dans ces conditions, eu égard à la nature de la liberté garantie par l'article 11 de la Déclaration de 1789, le législateur ne pouvait, quelles que soient les garanties encadrant le prononcé des sanctions, confier de tels pouvoirs à une autorité administrative dans le but de protéger les droits des titulaires du droit d'auteur et de droits voisins ;

³ 18. Considerando que, en este caso, se desprende de las disposiciones contempladas en la realización de un acto de infracción de la dirección de Internet del abonado, de acuerdo con los términos del segundo párrafo del artículo L. 331-21, “lo esencial de las infracciones de la obligación establecida en el artículo L. 336-3” que sólo el titular del contrato de suscripción de acceso a Internet pueden estar sujetos a las sanciones impuestas por el dispositivo remitidos; que, para eludir las sanciones, que, en virtud del artículo L. 331-38, de presentar pruebas para demostrar que la infracción de los derechos de autor o derechos afines a los derechos es parte del fraude de una tercera persona sólo, a cargo de una inversión de la carga de la prueba, Artículo L. 331-

Respecto de la vida privada (nº 21 y ss.), los demandantes consideraban un claro desequilibrio frente a la protección de los derechos de autor al establecerse un “control general de las comunicaciones electrónicas” incompatible con la exigencia constitucional del derecho a la intimidad sin tener garantías suficientes las facultades que se conceden a agentes privados para recoger las direcciones de suscriptores sospechosos de haber compartido una lista de obras protegidas.

Sin embargo, la Corte (nº 28) parte de la base de que sólo una Administración judicial puede imponer las sanciones restrictivas de la libertad de expresión y que los datos de tráfico y personales serán transmitidos a la autoridad competente con todas las garantías que correspondan en un procedimiento de esta naturaleza bajo el principio de proporcionalidad. Señala en este punto que los agentes jurados (artículo L. 331-24 del Código de la propiedad intelectual) no tienen facultades para supervisar o interceptar la correspondencia privada o comercial (nº 30). Por todo ello, no estima la inconstitucionalidad por vulneración de la vida privada.

También, la norma preve que por Decreto se especifiquen las condiciones con las que la Alta Autoridad administrativa independiente que crea la ley pueda asignar una etiqueta “para identificar claramente la legalidad” de la oferta de servicios de comunicación en línea. Se alegaba un quebranto del principio de reserva normativa siendo que queda afectada la libertad de expresión por la “etiquetación” de las informaciones legales. Sin embargo, la Corte considera que el poder que se atribuye no puede ser arbitrario (nº 34) y que una autoridad independiente sí que puede tener esta facultad.

Finalmente, el artículo 10 de la Ley permite que ante infracciones de derechos, a petición de los afectados, el tribunal puede adoptar medidas de urgencia puede adoptar medidas de restricción de acceso a los contenidos. Los demandantes estiman que ello supone la restricción del acceso a la información sobre una base excesivamente amplia e incierta. Sin embargo, la Corte (nº 38) considera que la autoridad judicial tiene la legitimidad y facultad suficientes para adoptar en cada caso concreto las “medidas estrictamente necesarias”⁴.

38 establece, en contra de los requisitos del artículo 9 de la Declaración de 1789, una presunción de culpabilidad contra el titular de acceso a Internet, podría conducir a la imposición de sanciones contra la privación o restricción de la ley;

18. Considérant, en l'espèce, qu'il résulte des dispositions déferées que la réalisation d'un acte de contrefaçon à partir de l'adresse internet de l'abonné constitue, selon les termes du deuxième alinéa de l'article L. 331-21, “ la matérialité des manquements à l'obligation définie à l'article L. 336-3 “ ; que seul le titulaire du contrat d'abonnement d'accès à internet peut faire l'objet des sanctions instituées par le dispositif déferé ; que, pour s'exonérer de ces sanctions, il lui incombe, en vertu de l'article L. 331-38, de produire les éléments de nature à établir que l'atteinte portée au droit d'auteur ou aux droits voisins procède de la fraude d'un tiers ; qu'ainsi, en opérant un renversement de la charge de la preuve, l'article L. 331-38 institue, en méconnaissance des exigences résultant de l'article 9 de la Déclaration de 1789, une présomption de culpabilité à l'encontre du titulaire de l'accès à internet, pouvant conduire à prononcer contre lui des sanctions privatives ou restrictives de droit ;

⁴ 38. *Teniendo en cuenta que permite a los propietarios de los derechos de autor o derechos conexos, y las personas encargadas de representarlas en la defensa de estos derechos a la petición de que el Alto Tribunal para, a raíz de una procedimiento, las medidas necesarias para prevenir o detener la violación de sus derechos, el legislador no ha violado la libertad de expresión y la comunicación, será el tribunal para decidir, de conformidad con el presente libertad, sólo las medidas estrictamente necesarias para la preservación de los derechos en cuestión y que esta reserva, el artículo 10 no viola la Constitución;*

38. Considérant qu'en permettant aux titulaires du droit d'auteur ou de droits voisins, ainsi qu'aux personnes habilitées à les représenter pour la défense de ces droits, de demander que le tribunal de grande instance ordonne, à l'issue d'une procédure contradictoire, les mesures nécessaires pour prévenir ou faire cesser une atteinte à leurs droits, le législateur n'a pas méconnu la liberté d'expression et de communication ; qu'il appartiendra à la juridiction saisie de ne prononcer, dans le respect de cette liberté, que les mesures strictement nécessaires à la préservation des droits en cause ; que, sous cette réserve, l'article 10 n'est pas contraire à la Constitution ;

Enlace a Decisión Consejo Constitucional

<http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/2009/decisions-par-date/2009/2009-580-dc/decision-n-2009-580-dc-du-10-juin-2009.42666.html>

Comunicado de Prensa (francés)

Décision n° 2009-580 DC

Le 10 juin 2009, par sa décision n° 2009-580 DC, le Conseil constitutionnel a examiné le recours dont il avait été saisi par plus de soixante députés à l'encontre de la loi favorisant la diffusion et la protection de la création sur Internet. La saisine mettait en cause les articles 5, 10 et 11 de la loi.

I - Sur les articles 5 et 11 de la loi déférée.

L'article 5 de la loi crée la " Haute Autorité pour la diffusion des oeuvres et la protection des droits sur Internet " (HADOPI). La commission de protection des droits de cette Autorité a pour mission de mettre en oeuvre les nouveaux mécanismes d'avertissement et de sanction des titulaires d'accès à internet qui auront manqué à l'obligation de surveillance de cet accès. L'article 11 de la loi définit cette obligation de surveillance.

Le Conseil constitutionnel, gardien des droits et libertés constitutionnellement garantis, a jugé que plusieurs des dispositions de ces articles 5 et 11 n'étaient pas conformes à la Constitution :

- La liberté de communication et d'expression, énoncée à l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, fait l'objet d'une constante jurisprudence protectrice par le Conseil constitutionnel (voir dernièrement décision n°2009-577 DC du 3 mars 2009). Cette liberté implique aujourd'hui, eu égard au développement généralisé d'internet et à son importance pour la participation à la vie démocratique et à l'expression des idées et des opinions, la liberté d'accéder à ces services de communication au public en ligne.

Or les articles 5 et 11 de la loi déférée confiaient à la commission de protection des droits de la HADOPI des pouvoirs de sanction l'habilitant à restreindre ou à empêcher l'accès à Internet à des titulaires d'abonnement. Ces pouvoirs pouvaient donc conduire à restreindre l'exercice, par toute personne, de son droit de s'exprimer et de communiquer librement. Dans ces conditions, le législateur ne pouvait, quelles que soient les garanties encadrant le prononcé des sanctions, confier de tels pouvoirs à une autorité administrative dans le but de protéger les titulaires du droit d'auteur. Ces pouvoirs ne peuvent incomber qu'au juge.

- L'article 9 de la Déclaration de 1789 pose le principe de la présomption d'innocence duquel il résulte que la loi ne saurait, en principe, instituer de présomption de culpabilité en matière répressive (n° 99-411 DC du 16 juin 1999). Or, aux termes de la loi déférée, seul le titulaire du contrat d'abonnement à internet pouvait faire l'objet des sanctions instituées. Pour s'exonérer, il lui incombait de produire des éléments de nature à établir que l'atteinte portée au droit d'auteur procède de la fraude d'un tiers. En méconnaissance de l'article 9 de la Déclaration de 1789, la loi instituait ainsi, en opérant un renversement de la charge de la preuve, une présomption de culpabilité pouvant conduire à prononcer contre l'abonné des sanctions privatives ou restrictives du droit.

De cette double analyse au regard des droits et libertés constitutionnellement garantis, et sans qu'il ait eu besoin d'examiner les autres griefs des requérants, le Conseil

constitucional a censuré, aux articles 5 et 11 de la loi déferée, toutes les dispositions relatives au pouvoir de sanction de la commission de protection des droits de la HADOPI.

Le Conseil constitutionnel a également examiné les pouvoirs d'avertissement confiés à la même autorité. Ces pouvoirs sont exercés à la suite de la transmission, par les sociétés d'auteur, de traitements de données à caractère personnel relatives aux infractions. Dans sa décision n° 2004-499 DC du 29 juillet 2004, le Conseil avait jugé que de tels traitements ne peuvent, sous peine de contrevenir au droit au respect de la vie privée, acquérir un caractère nominatif que dans le cadre d'une procédure judiciaire. Tel n'aurait pas été le cas si la HADOPI avait disposé des pouvoirs de sanction prévus par la loi déferée. Cependant, à la suite de l'annulation de ces derniers, cette autorité ne dispose plus que d'un rôle préalable à une procédure judiciaire. Son intervention est justifiée par l'ampleur des contrefaçons commises au moyen d'internet et l'utilité, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de limiter le nombre d'infractions dont l'autorité judiciaire sera saisie. Il s'ensuit que les traitements de données à caractère personnel s'inscrivent dans un processus de saisine de juridictions compétentes et ne sont pas contraires à la Constitution. Le Conseil a cependant formulé une réserve pour rappeler qu'il appartiendra à la CNIL, lorsqu'elle sera saisie de la demande d'autorisation de ces traitements de données à caractère personnel, de veiller à ce qu'ils respectent cette finalité.

II - Sur l'article 10 de la loi déferée.

L'article 10 de la loi déferée confie au tribunal de grande instance le pouvoir d'ordonner les mesures nécessaires pour prévenir ou faire cesser une atteinte à un droit d'auteur ou un droit voisin. Le législateur n'a pas méconnu la liberté d'expression et de communication en confiant ce pouvoir au juge. Il appartiendra à la juridiction saisie de ne prononcer, dans le respect de cette liberté, que des mesures strictement nécessaires à la préservation des droits en cause.

Comunicado de prensa (español Google)

| Decisión N ° 2009-580 DC

El 10 de junio de 2009 por la Decisión N ° 2009-580 DC, el Tribunal Constitucional examinó el recurso de casación que había sido abordado por más de sesenta miembros en contra de la ley para promover la difusión y la protección de la creación de Internet . Remisión que participen los artículos 5, 10 y 11 de la ley.

I - los artículos 5 y 11 de la Ley mencionada.

El artículo 5 de la Ley crea el "Haute Autorité pour la diffusion des oeuvres et la protection des droits sur Internet" (HADOPI). La Comisión de Derechos de la Autoridad tiene la misión de aplicar las nuevas sanciones y mecanismos de alerta para los propietarios de acceso a Internet que no han logrado controlar este acceso. El artículo 11 de la Ley define el derecho de supervisión.

El Consejo Constitucional, guardián de los derechos y libertades garantizados por la Constitución, consideró que varias de estas disposiciones de los artículos 5 y 11 no se ajustan a la Constitución:

- La libertad de comunicación y de expresión, establecido en el artículo 11 de la Declaración sobre los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, está bajo constante protección de la jurisprudencia por el Consejo Constitucional (véase la reciente decisión ° 2009-577 DC, 3 de marzo de 2009). Esta libertad se entiende hoy en día, habida cuenta de la evolución general de la Internet y su importancia para la participación

en la vida democrática y para expresar ideas y opiniones, la libertad de acceso a estos servicios de comunicación al público fila.

O de los artículos 5 y 11 de la ley a que se refiere la Comisión encomendó a la protección de los derechos de los poderes de sanción HADOPI el poder de limitar o impedir el acceso a Internet a los titulares de la suscripción. Estos poderes pueden llevar a restringir el ejercicio por cualquier persona de su derecho a expresarse y comunicarse libremente. En estas circunstancias, el legislador no puede, independientemente de las garantías que rigen la imposición de sanciones, encomendar dichas facultades a una autoridad administrativa con el fin de proteger los derechos de autor propietarios. Estos poderes no puede estar sólo ante el juez.

- Artículo 9 de la Declaración de 1789 establece el principio de presunción de inocencia que es evidente que la ley no, en principio, establecer una presunción de culpabilidad en materia penal (N ° 99-411 DC de 16 de junio de 1999). Sin embargo, en virtud de la ley se refiere únicamente al titular del contrato a suscribirse a Internet podría ser objeto de las sanciones impuestas. Para escapar, debe presentar pruebas para demostrar que la infracción de los derechos de autor es parte del fraude de un tercero. En la infracción del artículo 9 de la Declaración de 1789, y estableció la ley, la explotación de una inversión de la carga de la prueba, una presunción de culpabilidad puede dar lugar a votar en contra del abonado las sanciones privativas de libertad o las restricciones de la ley.

De este doble análisis de los derechos y libertades garantizados por la Constitución, y sin necesidad de considerar otros demandantes denuncias, el Consejo Constitucional de censura, los artículos 5 y 11 de la ley a que se refiere, todas las disposiciones relativas el poder de la sanción de la Comisión sobre la protección de HADOPI.

El Consejo Constitucional examinó también las facultades de advertencia dada a la misma autoridad. Estos poderes son ejercidos como consecuencia de la transmisión de derechos de autor por las sociedades, el tratamiento de datos personales relativos a la ofensa. En su Decisión N ° 2004-499 DC, de 29 de julio de 2004, el Consejo ha celebrado que este tratamiento no puede, so pena de violar el derecho a la intimidad, la obtención de un personaje llamado en el procedimiento registro. Éste no es el caso si el HADOPI, tiene facultades de sanción prevista por la ley se refiere a ella. Sin embargo, tras la cancelación de este último, que la autoridad hace más de un procedimiento judicial previo. Su intervención se justifica por la magnitud de la falsificación cometida a través de Internet y la utilidad en el interés de una buena administración de justicia, a fin de limitar el número de delitos para los que el poder judicial será apelado. De ello se deduce que el tratamiento de los datos personales se encuentran en un proceso de derivación de la jurisdicción y no sean contrarias a la Constitución. El Consejo, sin embargo, ha formulado una reserva al recordar que hasta la CNIL, a partir de la recepción de la solicitud de autorización de dicho tratamiento de datos de carácter personal para garantizar que cumplen con ese fin.

II - El artículo 10 de la Ley mencionada.

El artículo 10 de la Ley mencionada da el alto tribunal para ordenar las medidas necesarias para prevenir o detener la violación de los derechos de autor o derecho conexo. El legislador no ha violado la libertad de expresión y comunicación, dando este poder de juzgar. Corresponderá al tribunal de no imponer, en el respeto de esta libertad, que las medidas estrictamente necesarias para preservar los derechos en cuestión.

Texto completo Decisión (francés)

<http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/2009/decisions-par-date/2009/2009-580-dc/decision-n-2009-580-dc-du-10-juin-2009.42666.html>

Loi favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet

Le Conseil constitutionnel a été saisi dans les conditions prévues à l'article 61, deuxième alinéa, de la Constitution, de la loi favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet, le 19 mai 2009, par M. Jean-Marc AYRAULT, Mmes Patricia ADAM, Sylvie ANDRIEUX, MM. Jean-Paul BACQUET, Jean-Pierre BALLIGAND, Gérard BAPT, Claude BARTOLONE, Jacques BASCOU, Christian BATAILLE, Mme Delphine BATHO, M. Jean-Louis BIANCO, Mme Gisèle BIÉMOURET, MM. Serge BLISKO, Patrick BLOCHE, Maxime BONO, Jean-Michel BOUCHERON, Mme Marie-Odile BOUILLÉ, M. Christophe BOUILLON, Mme Monique BOULESTIN, MM. Pierre BOURGUIGNON, François BROTTES, Alain CACHEUX, Jérôme CAHUZAC, Jean-Christophe CAMBADÉLIS, Christophe CARESCHE, Mme Martine CARRILLON-COUVREUR, MM. Bernard CAZENEUVE, Jean-Paul CHANTEGUET, Alain CLAEYS, Jean-Michel CLÉMENT, Mme Marie-Françoise CLERGEAU, M. Gilles COCQUEMPOT, Mmes Catherine COUTELLE, Pascale CROZON, M. Frédéric CUVILLIER, Mme Claude DARCIAUX, M. Pascal DEGUILHEM, Mme Michèle DELAUNAY, MM. Guy DELCOURT, François DELUGA, Bernard DEROSIER, William DUMAS, Mme Laurence DUMONT, MM. Jean-Louis DUMONT, Jean-Paul DUPRÉ, Yves DURAND, Mme Odette DURIEZ, MM. Philippe DURON, Olivier DUSSOPT, Christian ECKERT, Henri EMMANUELLI, Mme Corinne ERHEL, MM. Laurent FABIUS, Albert FACON, Mme Martine FAURE, M. Hervé FÉRON, Mmes Aurélie FILIPPETTI, Geneviève FIORASO, M. Pierre FORGUES, Mme Valérie FOURNEYRON, MM. Michel FRANÇAIX, Jean-Louis GAGNAIRE, Guillaume GAROT, Jean GAUBERT, Mme Catherine GÉNISSON, MM. Jean-Patrick GILLE, Jean GLAVANY, Daniel GOLDBERG, Gaëtan GORCE, Mme Pascale GOT, MM. Marc GOUA, Jean GRELLIER, Mmes Elisabeth GUIGOU, Danièle HOFFMAN-RISPAL, M. François HOLLANDE, Mmes Monique IBORRA, Françoise IMBERT, MM. Michel ISSINDOU, Serge JANQUIN, Henri JIBRAYEL, Régis JUANICO, Mme Marietta KARAMANLI, M. Jean-Pierre KUCHEIDA, Mme Conchita LACUEY, MM. Jérôme LAMBERT, François LAMY, Jean LAUNAY, Jean-Yves LE BOUILLONNEC, Gilbert LE BRIS, Jean-Marie LE GUEN, Mme Annick LE LOCH, M. Bruno LE ROUX, Mme Marylise LEBRANCHU, MM. Patrick LEBRETON, Michel LEFAIT, Patrick LEMASLE, Mmes Catherine LEMORTON, Annick LEPETIT, MM. Bernard LESTERLIN, François LONCLE, Victorin LUREL, Jean MALLOT, Louis-Joseph MANSCOUR, Mmes Jacqueline MAQUET, Marie-Lou MARCEL, M. Jean-René MARSAC, Mmes Martine MARTINEL, Frédérique MASSAT, MM. Gilbert MATHON, Didier MATHUS, Mme Sandrine MAZETIER, MM. Michel MÉNARD, Kléber MESQUIDA, Didier MIGAUD, Pierre MOSCOVICI, Pierre-Alain MUET, Henri NAYROU, Alain NÉRI, Mmes Marie-Renée OGET, Françoise OLIVIER-COUCPEAU, George PAU-LANGEVIN, MM. Christian PAUL, Germinal PEIRO, Jean-Luc PÉRAT, Jean-Claude PEREZ, Mme Marie-Françoise PÉROL-DUMONT, MM. Philippe PLISSON, François PUPPONI, Mme Catherine QUÉRÉ, M. Jean-Jack QUEYRANNE, Mme Marie-Line REYNAUD, MM. Alain RODET, Alain ROUSSET, Patrick ROY, Michel SAINTE-MARIE, Michel SAPIN, Christophe SIRUGUE, Mme Marisol TOURAINÉ, MM. Jean-Louis TOURAINÉ, Jean-Jacques URVOAS, Daniel VAILLANT, Jacques VALAX, André VALLINI, Manuel VALLS, Michel VAUZELLE, Alain VIDALIES, Jean-Michel VILLAUMÉ, Philippe VUILQUE, Guy CHAMBEFORT, Gérard CHARASSE, René DOSIÈRE, Paul GIACOBBI, Joël GIRAUD, Mmes Jeanny MARC, Dominique ORLIAC, Martine PINVILLE,

M. Simon RENUCCI, Mme Chantal ROBIN-RODRIGO, M. Marcel ROGEMONT, Mmes Christiane TAUBIRA, Marie-Hélène AMIABLE, MM. François ASENSI, Alain BOCQUET, Patrick BRAOUEZEC, Jean-Pierre BRARD, Mme Marie-George BUFFET, MM. Jean-Jacques CANDELIER, André CHASSAIGNE, Jacques DESALLANGRE, Mme Jacqueline FRAYSSE, MM. André GERIN, Pierre GOSNAT, Maxime GREMETZ, Jean-Paul LECOQ, Roland MUZEAU, Daniel PAUL, Jean-Claude SANDRIER, Michel VAXES, Marc DOLEZ, Mmes Huguette BELLO, Martine BILLARD, MM. Yves COCHET, Noël MAMÈRE et François de RUGY, députés.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code de la propriété intellectuelle ;

Vu le code des postes et des communications électroniques ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, ensemble la décision n° 2004-499 DC du 29 juillet 2004 ;

Vu les observations du Gouvernement, enregistrées le 29 mai 2009 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que les députés requérants défèrent au Conseil constitutionnel la loi favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet ; qu'ils contestent sa procédure d'examen ainsi que la conformité à la Constitution de ses articles 5, 10 et 11 ;

- SUR LA PROCÉDURE D'EXAMEN DE LA LOI :

2. Considérant que, selon les requérants, le Gouvernement n'aurait pas fourni au Parlement les éléments objectifs d'information susceptibles de fonder des débats clairs et sincères ; qu'ils soutiennent, dès lors, que la procédure d'adoption de la loi était irrégulière ;

3. Considérant que les assemblées ont disposé, comme l'attestent tant les rapports des commissions saisies au fond ou pour avis que le compte rendu des débats, d'éléments d'information suffisants sur les dispositions du projet de loi en discussion ; que, par suite, le grief invoqué manque en fait ;

- SUR LES ARTICLES 5 ET 11 :

4. Considérant, d'une part, que l'article 5 de la loi déférée crée au chapitre Ier du titre III du livre III de la première partie du code de la propriété intellectuelle une section 3 qui comporte les articles L. 331-12 à L. 331-45 et qui est consacrée à la " Haute Autorité pour la diffusion des oeuvres et la protection des droits sur internet " ; que cette nouvelle autorité administrative indépendante est composée d'un collège et d'une commission de protection des droits ; que le collège est notamment chargé de favoriser l'offre légale des oeuvres et objets auxquels est attaché un droit d'auteur ou un droit voisin ; que la commission de protection des droits a pour mission de mettre en oeuvre les nouveaux mécanismes d'avertissement et de sanction administrative des titulaires d'accès à internet qui auront manqué à l'obligation de surveillance de cet accès ;

5. Considérant, d'autre part, que l'article 11 insère, au sein du chapitre IV du même titre, les articles L. 336-3 et L. 336-4 ; qu'il définit l'obligation de surveillance de l'accès à internet et détermine les cas dans lesquels est exonéré de toute sanction le titulaire de l'abonnement à internet dont l'accès a été utilisé à des fins portant atteinte aux droits de la propriété intellectuelle ;

. En ce qui concerne l'obligation de surveillance de l'accès à internet :

6. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 336-3 du code de la propriété intellectuelle : " La personne titulaire de l'accès à des services de

communication au public en ligne a l'obligation de veiller à ce que cet accès ne fasse pas l'objet d'une utilisation à des fins de reproduction, de représentation, de mise à disposition ou de communication au public d'oeuvres ou d'objets protégés par un droit d'auteur ou par un droit voisin sans l'autorisation des titulaires des droits prévus aux livres Ier et II lorsqu'elle est requise “ ;

7. Considérant que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la définition de cette obligation est distincte de celle du délit de contrefaçon ; qu'elle est énoncée en des termes suffisamment clairs et précis ; que, par suite, en l'édictant, le législateur n'a méconnu ni la compétence qu'il tient de l'article 34 de la Constitution, ni l'objectif de valeur constitutionnelle d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi ;

. En ce qui concerne la répression des manquements à l'obligation de surveillance :

8. Considérant, d'une part, qu'aux termes des alinéas 2 à 6 du même article L. 336-3 : “ Aucune sanction ne peut être prise à l'égard du titulaire de l'accès dans les cas suivants :

“ 1° Si le titulaire de l'accès a mis en oeuvre l'un des moyens de sécurisation figurant sur la liste mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 331-32 ;

“ 2° Si l'atteinte aux droits visés au premier alinéa du présent article est le fait d'une personne qui a frauduleusement utilisé l'accès au service de communication au public en ligne ;

“ 3° En cas de force majeure.

“ Le manquement de la personne titulaire de l'accès à l'obligation définie au premier alinéa n'a pas pour effet d'engager la responsabilité pénale de l'intéressé. “

9. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 331-27 : “ Lorsqu'il est constaté que l'abonné a méconnu l'obligation définie à l'article L. 336-3 dans l'année suivant la réception d'une recommandation adressée par la commission de protection des droits et assortie d'une lettre remise contre signature ou de tout autre moyen propre à établir la preuve de la date d'envoi de cette recommandation et celle de sa réception par l'abonné, la commission peut, après une procédure contradictoire, prononcer, en fonction de la gravité des manquements et de l'usage de l'accès, l'une des sanctions suivantes :

“ 1° La suspension de l'accès au service pour une durée de deux mois à un an assortie de l'impossibilité, pour l'abonné, de souscrire pendant la même période un autre contrat portant sur l'accès à un service de communication au public en ligne auprès de tout opérateur ;

“ 2° Une injonction de prendre, dans un délai qu'elle détermine, des mesures de nature à prévenir le renouvellement du manquement constaté, notamment un moyen de sécurisation figurant sur la liste définie au deuxième alinéa de l'article L. 331-32, et d'en rendre compte à la Haute Autorité, le cas échéant sous astreinte “ ;

10. Considérant qu'en application de l'article L. 331-28, la commission de protection des droits de la Haute Autorité peut, avant d'engager une procédure de sanction, proposer à l'abonné une transaction comportant soit une suspension de l'accès à internet pendant un à trois mois, soit une obligation de prendre des mesures de nature à prévenir le renouvellement du manquement ; que l'article L. 331-29 autorise cette commission à prononcer les sanctions prévues à l'article L. 331-27 en cas de non-respect de la transaction ; que l'article L. 331-30 précise les conséquences contractuelles de la suspension de l'accès au service ; que l'article L. 331-31 prévoit les conditions dans lesquelles le fournisseur d'accès est tenu de mettre en oeuvre la mesure de suspension ; que l'article L. 331-32 détermine les modalités selon lesquelles est établie la liste des moyens de sécurisation dont la mise en oeuvre exonère le titulaire de l'accès de toute sanction ; que les articles L. 331-33 et L. 331-34 instituent un répertoire national

recensant les personnes ayant fait l'objet d'une mesure de suspension ; qu'enfin, l'article L. 331-36 permet à la commission de protection des droits de conserver, au plus tard jusqu'au moment où la suspension d'accès a été entièrement exécutée, les données techniques qui ont été mises à sa disposition ;

11. Considérant que, selon les requérants, en conférant à une autorité administrative, même indépendante, des pouvoirs de sanction consistant à suspendre l'accès à internet, le législateur aurait, d'une part, méconnu le caractère fondamental du droit à la liberté d'expression et de communication et, d'autre part, institué des sanctions manifestement disproportionnées ; qu'ils font valoir, en outre, que les conditions de cette répression institueraient une présomption de culpabilité et porteraient une atteinte caractérisée aux droits de la défense ;

12. Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : “ La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme : tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi “ ; qu'en l'état actuel des moyens de communication et eu égard au développement généralisé des services de communication au public en ligne ainsi qu'à l'importance prise par ces services pour la participation à la vie démocratique et l'expression des idées et des opinions, ce droit implique la liberté d'accéder à ces services ;

13. Considérant que la propriété est au nombre des droits de l'homme consacrés par les articles 2 et 17 de la Déclaration de 1789 ; que les finalités et les conditions d'exercice du droit de propriété ont connu depuis 1789 une évolution caractérisée par une extension de son champ d'application à des domaines nouveaux ; que, parmi ces derniers, figure le droit, pour les titulaires du droit d'auteur et de droits voisins, de jouir de leurs droits de propriété intellectuelle et de les protéger dans le cadre défini par la loi et les engagements internationaux de la France ; que la lutte contre les pratiques de contrefaçon qui se développent sur internet répond à l'objectif de sauvegarde de la propriété intellectuelle ;

14. Considérant que le principe de la séparation des pouvoirs, non plus qu'aucun principe ou règle de valeur constitutionnelle, ne fait obstacle à ce qu'une autorité administrative, agissant dans le cadre de prérogatives de puissance publique, puisse exercer un pouvoir de sanction dans la mesure nécessaire à l'accomplissement de sa mission dès lors que l'exercice de ce pouvoir est assorti par la loi de mesures destinées à assurer la protection des droits et libertés constitutionnellement garantis ; qu'en particulier doivent être respectés le principe de la légalité des délits et des peines ainsi que les droits de la défense, principes applicables à toute sanction ayant le caractère d'une punition, même si le législateur a laissé le soin de la prononcer à une autorité de nature non juridictionnelle ;

15. Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la Constitution : “ La loi fixe les règles concernant... les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques “ ; que, sur ce fondement, il est loisible au législateur d'édicter des règles de nature à concilier la poursuite de l'objectif de lutte contre les pratiques de contrefaçon sur internet avec l'exercice du droit de libre communication et de la liberté de parler, écrire et imprimer ; que, toutefois, la liberté d'expression et de communication est d'autant plus précieuse que son exercice est une condition de la démocratie et l'une des garanties du respect des autres droits et libertés ; que les atteintes portées à l'exercice de cette liberté doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées à l'objectif poursuivi ;

16. Considérant que les pouvoirs de sanction institués par les dispositions critiquées habilite la commission de protection des droits, qui n'est pas une juridiction, à restreindre ou à empêcher l'accès à internet de titulaires d'abonnement ainsi que des personnes qu'ils en font bénéficier ; que la compétence reconnue à cette autorité administrative n'est pas limitée à une catégorie particulière de personnes mais s'étend à la totalité de la population ; que ses pouvoirs peuvent conduire à restreindre l'exercice, par toute personne, de son droit de s'exprimer et de communiquer librement, notamment depuis son domicile ; que, dans ces conditions, eu égard à la nature de la liberté garantie par l'article 11 de la Déclaration de 1789, le législateur ne pouvait, quelles que soient les garanties encadrant le prononcé des sanctions, confier de tels pouvoirs à une autorité administrative dans le but de protéger les droits des titulaires du droit d'auteur et de droits voisins ;

17. Considérant, en outre, qu'en vertu de l'article 9 de la Déclaration de 1789, tout homme est présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable ; qu'il en résulte qu'en principe le législateur ne saurait instituer de présomption de culpabilité en matière répressive ; que, toutefois, à titre exceptionnel, de telles présomptions peuvent être établies, notamment en matière contraventionnelle, dès lors qu'elles ne revêtent pas de caractère irréfragable, qu'est assuré le respect des droits de la défense et que les faits induisent raisonnablement la vraisemblance de l'imputabilité ;

18. Considérant, en l'espèce, qu'il résulte des dispositions déferées que la réalisation d'un acte de contrefaçon à partir de l'adresse internet de l'abonné constitue, selon les termes du deuxième alinéa de l'article L. 331-21, " la matérialité des manquements à l'obligation définie à l'article L. 336-3 " ; que seul le titulaire du contrat d'abonnement d'accès à internet peut faire l'objet des sanctions instituées par le dispositif déferé ; que, pour s'exonérer de ces sanctions, il lui incombe, en vertu de l'article L. 331-38, de produire les éléments de nature à établir que l'atteinte portée au droit d'auteur ou aux droits voisins procède de la fraude d'un tiers ; qu'ainsi, en opérant un renversement de la charge de la preuve, l'article L. 331-38 institue, en méconnaissance des exigences résultant de l'article 9 de la Déclaration de 1789, une présomption de culpabilité à l'encontre du titulaire de l'accès à internet, pouvant conduire à prononcer contre lui des sanctions privatives ou restrictives de droit ;

19. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs, que doivent être déclarés contraires à la Constitution, à l'article 11 de la loi déferée, les deuxième à cinquième alinéas de l'article L. 336-3 et, à son article 5, les articles L. 331-27 à L. 331-31, L. 331-33 et L. 331-34 ; qu'il en va de même, au deuxième alinéa de l'article L. 331-21, des mots : " et constatent la matérialité des manquements à l'obligation définie à l'article L. 336-3 ", du dernier alinéa de l'article L. 331-26, ainsi que des mots : " pour être considérés, à ses yeux, comme exonérant valablement de sa responsabilité le titulaire de l'accès au titre de l'article L. 336-3 " figurant au premier alinéa de l'article L. 331-32 et des mots : " dont la mise en oeuvre exonère valablement le titulaire de l'accès de sa responsabilité au titre de l'article L. 336-3 " figurant au deuxième alinéa de ce même article ;

20. Considérant que doivent également être déclarés contraires à la Constitution, en tant qu'ils n'en sont pas séparables, à l'article 5, les mots : " et l'avertissant des sanctions encourues en cas de renouvellement du manquement présumé " figurant au premier alinéa de l'article L. 331-26, les mots : " ainsi que des voies de recours possibles en application des articles L. 331-26 à L. 331-31 et L. 331-33 " figurant à l'article L. 331-35, les mots : " et, au plus tard, jusqu'au moment où la suspension de l'accès prévue par ces

dispositions a été entièrement exécutée “ figurant au premier alinéa de l'article L. 331-36 et le second alinéa de cet article, les mots : “ ainsi que du répertoire national visé à l'article L. 331-33, permettant notamment aux personnes dont l'activité est d'offrir un accès à un service de communication au public en ligne de disposer, sous la forme d'une simple interrogation, des informations strictement nécessaires pour procéder à la vérification prévue par ce même article “ figurant à l'article L. 331-37, ainsi que le second alinéa de l'article L. 331-38 ; qu'il en va de même, à l'article 16, des mots : “ de manquement à l'obligation définie à l'article L. 336-3 du code de la propriété intellectuelle et “, ainsi que des I et V de l'article 19 ;

. En ce qui concerne le droit au respect de la vie privée :

21. Considérant que, selon les requérants, la loi déferée opère une conciliation manifestement déséquilibrée entre la protection des droits d'auteur et le droit au respect de la vie privée ; que l'objectif poursuivi par le législateur nécessiterait la mise en oeuvre de mesures de surveillance des citoyens et l'instauration d'un “ contrôle généralisé des communications électroniques “ incompatibles avec l'exigence constitutionnelle du droit au respect de la vie privée ; que les requérants font valoir que les pouvoirs reconnus aux agents privés, habilités à collecter les adresses des abonnés suspectés d'avoir partagé un fichier d'oeuvre protégée, ne sont pas encadrés par des garanties suffisantes ;

22. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 2 de la Déclaration de 1789 : “ Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression “ ; que la liberté proclamée par cet article implique le respect de la vie privée ;

23. Considérant, en second lieu, qu'il appartient au législateur, en vertu de l'article 34 de la Constitution, de fixer les règles concernant les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques ; qu'il lui appartient d'assurer la conciliation entre le respect de la vie privée et d'autres exigences constitutionnelles, telles que la protection du droit de propriété ;

24. Considérant qu'en vertu de l'article L. 331-24 du code de la propriété intellectuelle, la commission de protection des droits agit sur saisine d'agents assermentés et agréés dans les conditions définies à l'article L. 331-2 du même code ; que ces agents sont désignés par les organismes de défense professionnelle régulièrement constitués, par les sociétés de perception et de répartition des droits ou par le Centre national de la cinématographie ;

25. Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée : “ Les traitements de données à caractère personnel relatives aux infractions, condamnations et mesures de sûreté ne peuvent être mis en oeuvre que par : ... 4° Les personnes morales mentionnées aux articles L. 321-1 et L. 331-1 du code de la propriété intellectuelle, agissant au titre des droits dont elles assurent la gestion ou pour le compte des victimes d'atteintes aux droits prévus aux livres Ier, II et III du même code aux fins d'assurer la défense de ces droits “ ; que ces personnes morales sont les sociétés de perception et de répartition des droits et les organismes de défense professionnelle régulièrement constitués ;

26. Considérant que les dispositions combinées de l'article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques, tel qu'il est modifié par l'article 14 de la loi déferée, des troisième et cinquième alinéas de l'article L. 331-21 du code de la propriété intellectuelle et de son article L. 331-24 ont pour effet de modifier les finalités en vue desquelles ces personnes peuvent mettre en oeuvre des traitements portant sur des données relatives à des infractions ; qu'elles permettent en effet que, désormais, les

données ainsi recueillies acquièrent un caractère nominatif également dans le cadre de la procédure conduite devant la commission de protection des droits ;

27. Considérant que la lutte contre les pratiques de contrefaçon sur internet répond à l'objectif de sauvegarde de la propriété intellectuelle et de la création culturelle ; que, toutefois, l'autorisation donnée à des personnes privées de collecter les données permettant indirectement d'identifier les titulaires de l'accès à des services de communication au public en ligne conduit à la mise en oeuvre, par ces personnes privées, d'un traitement de données à caractère personnel relatives à des infractions ; qu'une telle autorisation ne saurait, sans porter une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée, avoir d'autres finalités que de permettre aux titulaires du droit d'auteur et de droits voisins d'exercer les recours juridictionnels dont dispose toute personne physique ou morale s'agissant des infractions dont elle a été victime ;

28. Considérant qu'à la suite de la censure résultant des considérants 19 et 20, la commission de protection des droits ne peut prononcer les sanctions prévues par la loi déferée ; que seul un rôle préalable à une procédure judiciaire lui est confié ; que son intervention est justifiée par l'ampleur des contrefaçons commises au moyen d'internet et l'utilité, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de limiter le nombre d'infractions dont l'autorité judiciaire sera saisie ; qu'il en résulte que les traitements de données à caractère personnel mis en oeuvre par les sociétés et organismes précités ainsi que la transmission de ces données à la commission de protection des droits pour l'exercice de ses missions s'inscrivent dans un processus de saisine des juridictions compétentes ;

29. Considérant que ces traitements seront soumis aux exigences prévues par la loi du 6 janvier 1978 susvisée ; que les données ne pourront être transmises qu'à cette autorité administrative ou aux autorités judiciaires ; qu'il appartiendra à la Commission nationale de l'informatique et des libertés, saisie pour autoriser de tels traitements, de s'assurer que les modalités de leur mise en oeuvre, notamment les conditions de conservation des données, seront strictement proportionnées à cette finalité ;

30. Considérant, en outre, que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les agents assermentés visés à l'article L. 331-24 du code de la propriété intellectuelle ne sont pas investis du pouvoir de surveiller ou d'intercepter des échanges ou des correspondances privés ;

31. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sous la réserve énoncée au considérant 29, la mise en oeuvre de tels traitements de données à caractère personnel ne méconnaît pas les exigences constitutionnelles précitées ;

. En ce qui concerne le renvoi à des décrets en Conseil d'État :

32. Considérant que, selon les requérants, en renvoyant à un décret le soin de préciser les conditions dans lesquelles la Haute Autorité pourra attribuer un label permettant " d'identifier clairement le caractère légal " des offres de service de communication en ligne, l'article L. 331-23 du code de la propriété intellectuelle laisserait à la Haute Autorité le pouvoir de déterminer de manière discrétionnaire les offres qui présentent, selon elle, un caractère légal ; que les requérants ajoutent que l'article L. 331-32 ne pouvait renvoyer au décret le soin de fixer la procédure d'évaluation et de labellisation des moyens de sécurisation de l'accès à internet ; que, ce faisant, le législateur n'aurait pas exercé la compétence qu'il tient de l'article 34 de la Constitution en matière de garanties fondamentales reconnues aux citoyens dans l'exercice des libertés publiques ;

33. Considérant que, si l'article 34 de la Constitution dispose que " la loi fixe les règles concernant... les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice

des libertés publiques “, la mise en oeuvre des garanties déterminées par le législateur relève du pouvoir exécutif ; que les dispositions de l'article 21 de la Constitution, qui confient au Premier ministre le soin d'assurer l'exécution des lois et, sous réserve des dispositions de l'article 13, d'exercer le pouvoir réglementaire, ne font pas obstacle à ce que le législateur confie à une autorité publique autre que le Premier ministre le soin de fixer des normes permettant la mise en oeuvre des principes posés par la loi, pourvu que cette habilitation ne concerne que des mesures limitées tant par leur champ d'application que par leur contenu ; qu'une telle attribution de compétence n'a pas pour effet de dispenser l'autorité réglementaire du respect des exigences constitutionnelles ;

34. Considérant que la labellisation du “ caractère légal “ des offres de service de communication au public en ligne a pour seul objet de favoriser l'identification, par le public, d'offres de service respectant les droits de la propriété intellectuelle ; qu'il résulte du deuxième alinéa de l'article L. 331-23 que, saisie d'une demande d'attribution d'un tel label, la Haute Autorité sera tenue d'y répondre favorablement dès lors qu'elle constatera que les services proposés par cette offre ne portent pas atteinte aux droits d'auteur ou aux droits voisins ; que le renvoi au décret pour fixer les conditions d'attribution de ce label a pour seul objet la détermination des modalités selon lesquelles les demandes de labellisation seront reçues et instruites par la Haute Autorité ; que ces dispositions ne lui confèrent aucun pouvoir arbitraire ;

35. Considérant que, dans sa rédaction issue de la censure résultant des considérants 19 et 20, l'article L. 331-32 a pour seul objet de favoriser l'utilisation des moyens de sécurisation dont la mise en oeuvre permet d'assurer la surveillance d'un accès à internet conformément aux prescriptions de l'article L. 336-3 ; qu'il revient au pouvoir réglementaire de définir les conditions dans lesquelles ce label sera délivré ; qu'il s'ensuit que les dispositions des articles 5 et 11 de la loi déferée, autres que celles déclarées contraires à la Constitution, ne sont pas entachées d'incompétence négative ;

- SUR L'ARTICLE 10 :

36. Considérant que l'article 10 de la loi donne une nouvelle rédaction de l'article L. 336-2 du code de la propriété intellectuelle ; qu'aux termes de cet article : “ En présence d'une atteinte à un droit d'auteur ou à un droit voisin occasionnée par le contenu d'un service de communication au public en ligne, le tribunal de grande instance, statuant le cas échéant en la forme des référés, peut ordonner à la demande des titulaires de droits sur les oeuvres et objets protégés, de leurs ayants droit, des sociétés de perception et de répartition des droits visées à l'article L. 321-1 ou des organismes de défense professionnelle visés à l'article L. 331-1, toutes mesures propres à prévenir ou à faire cesser une telle atteinte à un droit d'auteur ou un droit voisin, à l'encontre de toute personne susceptible de contribuer à y remédier “ ;

37. Considérant que, selon les requérants, la possibilité “ de bloquer, par des mesures et injonctions, le fonctionnement d'infrastructures de télécommunications... pourrait priver beaucoup d'utilisateurs d'internet du droit de recevoir des informations et des idées “ ; qu'en outre, le caractère excessivement large et incertain de cette disposition pourrait conduire les personnes potentiellement visées par l'article 10 à restreindre, à titre préventif, l'accès à internet ;

38. Considérant qu'en permettant aux titulaires du droit d'auteur ou de droits voisins, ainsi qu'aux personnes habilitées à les représenter pour la défense de ces droits, de demander que le tribunal de grande instance ordonne, à l'issue d'une procédure contradictoire, les mesures nécessaires pour prévenir ou faire cesser une atteinte à leurs droits, le législateur n'a pas méconnu la liberté d'expression et de communication ; qu'il appartiendra à la juridiction saisie de ne prononcer, dans le respect de cette liberté, que

les mesures strictement nécessaires à la préservation des droits en cause ; que, sous cette réserve, l'article 10 n'est pas contraire à la Constitution ;

39. Considérant qu'il n'y a lieu, pour le Conseil constitutionnel, de soulever d'office aucune question de conformité à la Constitution,

D É C I D E :

Article premier.- Sont déclarées contraires à la Constitution les dispositions suivantes du code de la propriété intellectuelle, telles qu'elles résultent des articles 5 et 11 de la loi favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet :

- au deuxième alinéa de l'article L. 331-21, les mots : “ et constatent la matérialité des manquements à l'obligation définie à l'article L. 336-3 “ ;

- au premier alinéa de l'article L. 331-26, les mots : “ et l'avertissant des sanctions encourues en cas de renouvellement du manquement présumé “ ;

- le dernier alinéa de l'article L. 331-26 ;

- les articles L. 331-27 à L. 331-31 ;

- au premier alinéa de l'article L. 331-32, les mots : “ pour être considérés, à ses yeux, comme exonérant valablement de sa responsabilité le titulaire de l'accès au titre de l'article L. 336-3 “ ;

- au deuxième alinéa du même article, les mots : “ dont la mise en oeuvre exonère valablement le titulaire de l'accès de sa responsabilité au titre de l'article L. 336-3 “ ;

- les articles L. 331-33 et L. 331-34 ;

- à l'article L. 331-35, les mots : “ ainsi que des voies de recours possibles en application des articles L. 331-26 à L. 331-31 et L. 331-33 “ ;

- à l'article L. 331-36, les mots : “ et, au plus tard, jusqu'au moment où la suspension de l'accès prévue par ces dispositions a été entièrement exécutée “ figurant au premier alinéa ainsi que le second alinéa ;

- au deuxième alinéa de l'article L. 331-37, les mots : “ , ainsi que du répertoire national visé à l'article L. 331-33, permettant notamment aux personnes dont l'activité est d'offrir un accès à un service de communication au public en ligne de disposer, sous la forme d'une simple interrogation, des informations strictement nécessaires pour procéder à la vérification prévue par ce même article “ ;

- le second alinéa de l'article L. 331-38 ;

- les deuxième à cinquième alinéas de l'article L. 336-3.

Il en est de même des mots : “ de manquement à l'obligation définie à l'article L. 336-3 du code de la propriété intellectuelle et “ figurant à l'article 16 de la même loi, ainsi que des I et V de l'article 19.

Article 2.- Au premier alinéa de l'article L. 331-17 du même code, tel qu'il résulte de l'article 5 de la même loi, les mots : “ aux articles L. 331-26 à L. 331-31 et à l'article L. 331-33 “ sont remplacés par les mots : “ à l'article L. 331-26 “.

Article 3.- Sous les réserves énoncées aux considérants 29 et 38, l'article 10 de la même loi, ainsi que le surplus de ses articles 5, 11, 16 et 19, ne sont pas contraires à la Constitution.

Article 4.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 10 juin 2009, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, MM. Guy CANIVET, Jacques CHIRAC, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Pierre JOXE et Jean-Louis PEZANT, Mme Dominique SCHNAPPER et M. Pierre STEINMETZ.

Publication Journal officiel du 13 juin 2009, p. 9675

Recueil, p. (en attente de publication)

Texto completo Decisión (español Google)

Ley para promover la difusión y la protección de la creación en Internet

El Consejo Constitucional se ha ocupado en las condiciones establecidas en el artículo 61, párrafo segundo, de la Constitución, la ley la promoción de la difusión y la protección de la creación en Internet, el 19 de mayo de 2009, el Sr. Jean-Marc Ayrault , la Sra. Patricia Adam, Sylvie ANDRIEUX, MM. Jean-Paul Bacquet, Jean-Pierre Balligand, Gérard BAPT, Claude Bartolone, Jacques BASCOU, Christian BATAILLE, la Sra. Delphine Batho, señor Jean-Louis Bianco, Gisèle BIÉMOURET, MM. Serge Blisko, Patrick Bloche, Maxime Bono, Jean-Michel Boucheron, Marie-Odile BOUILLÉ, Christophe BOUILLON, Monique Boulestin, MM. Pierre Bourguignon, François BROTTES, Alain CACHEUX, Jérôme Cahuzac, Jean-Christophe CAMBADÉLIS, Christophe Caresche, la Sra. Martine Carrillon techado, MM. Bernard Cazeneuve, Jean-Paul CHANTEGUET, Alain Claeys, Jean-Michel Clément, Marie-Françoise Clergeau, Gilles COCQUEMPOT, Catherine COUTEL, Pascale CROZON, Frédéric CUVILLIER, la Sra. Claude DARCIAUX, el Sr. Pascal Deguilhem, Michèle DELAUNAY, MM. Guy Delcourt, François diluvio, Bernard Derosier, William DUMAS, Sra. Laurence DUMONT, MM. Jean-Louis Dumont, Jean-Paul DUPRÉ, Yves Durand, la Sra. Odette Duriez, MM. Philippe DURON, Olivier DUSSOPT, Christian Eckert, Henri Emmanuelli, Corinne ERHEL, MM. Laurent Fabius, Albert SO, Sra. Martine Faure, M. Hervé Feron, la Sra. Aurélie Filippetti, Geneviève Fioraso, Pierre Forgues, Valérie FOURNEYRON, MM. FRANCAIX Michel, Jean-Louis Gagnaire, GAROT Guillaume, Jean GAUBERT Catherine Génisson, MM. Jean-Patrick Gilles, Jean Glavany, Daniel Goldberg, Gaëtan Gorce, Sra. Pascale de Taiwán, MM. Marc Goua, Jean GRELLIER, Sra. Elisabeth Guigou, Danièle Hoffman-Rispal, François Hollande, la Sra. Monique IBORRA, Françoise Imbert, MM. ISSINDOU Michel, Serge JANQUIN, Henri JIBRAYEL, Régis Juanicó, la Sra. Marietta KARAMANLIS, Jean-Pierre KUCHEIDA, la Sra. Conchita LACUEY, MM. Jérôme Lambert, François Lamy, Jean Launay, Jean-Yves Le Bouillonec, Gilbert Le Bris, Jean-Marie Le Guen, Sra. Annick el lago, el Sr. Bruno LE ROUX, la Sra. Marylise Lebranchu, MM. Patrick Lebreton, Lefait Michel, Patrick LEMASLE, Catherine Lemorton, Annick Lepetit, MM. Lesterlin Bernard, François LONCLE, Victorin Lurel, Jean Mallot, Louis-Joseph MANSCOUR, la señora Jacqueline MAQUET, Marie-Lou Marcel, Jean-René Marsac, la Sra. Martine MARTINEL, Frédérique Massat, MM. Mathon Gilbert, Didier Mathus, Sandrine Mazetier, MM. Michel Ménard, Kléber MESQUIDA, MIGAUD Didier, Pierre Moscovici, Pierre-Alain MUET, Henri Alain NAYROU Neri, Sra. Marie-Renée Oget, Françoise OLIVIER-COUCHEAU, George-Pau Langevin, MM. Christian PAUL, Germinal Peiró, Jean-Luc PERAT, Jean-Claude Pérez, Marie-Françoise-DUMONT Perol, MM. Philip Plisson, Francisco PUPPONI Catherine Quéré, Jean-Jack Queyranne, Marie-Line Reynaud, el Sr. Alain Rodet, Alain Rousset, Patrick Roy, Michel Sainte-Marie, Michel Sapin, Christophe SIRUGUE, Marisol TOURAINE, MM. Jean-Louis TOURAINE, Jean-Jacques Urvoas, Daniel Vaillant, Jacques VALAX, André VALLIN, Manuel Valls, Michel Vauzelle, Alain Vidal, Jean-Michel Villaume, Philippe VUILQUE, Guy CHAMBEFORT, Gérard Charasse, René DOSIERE, Pablo Giacobbe, Joël GIRAUD , la Sra. Jeanny MARC, Dominique Orliac, Martine Pinville, Sr. Simon Renucci, la Sra. Chantal Robin-RODRIGO, Marcel ROGEMONT, señora Christiane Taubira, Marie-Hélène Amiable, MM. François Asensi, Alain Bocquet, BRAOUEZEC Patrick, Jean-Pierre Brard, Marie-George Buffet, MM. Jean-Jacques Candelier, André CHASSAIGNE, Jacques DESALLANGRE, Jacqueline Fraysse, MM. GERIN André, Pierre Gosnat Maxime Gremetz, Jean-Paul Lecoq, Roland Muzeau, Daniel

Paul, Jean-Claude Sandria, Vaxès Michel, Marc Dolez, la Sra. Huguette BELLO, Martine BILLARD, MM. Yves Cochet, Mamère Navidad y François de Ruggy, los Miembros.

EL CONSEJO CONSTITUCIONAL,

Teniendo en cuenta la Constitución;

Vu l'ordonnance n ° 58-1067 de 7 de noviembre de 1958 modificada Ley Orgánica del Consejo Constitucional;

Teniendo en cuenta el código de la propiedad intelectual;

Teniendo en cuenta el código de correos y comunicaciones electrónicas;

Teniendo en cuenta la Ley N ° 78-17 del 6 de enero de 1978, relativa a las computadoras, archivos y libertades, toda la decisión n ° 2004-499 DC, de 29 de julio de 2004;

Habida cuenta de las observaciones del Gobierno, registrada el 29 de mayo de 2009;

El ponente ha sido escuchada;

1. Considerando que los diputados demandantes deferente derecho constitucional a la facilitación de la difusión y protección de la creación en Internet, niegan su proceso de examen y el cumplimiento de la Constitución de los artículos 5, 10 y 11;

- EL PROCEDIMIENTO DE LA LEY:

2. Considerando que, según los querellantes, el Gobierno no facilite al Parlamento una información objetiva que pueda establecer el debate claro y honesto, sostiene, por tanto, que la aprobación de la ley es defectuosa ;

3. Teniendo en cuenta que las reuniones se preparan, como lo demuestran los informes de ambas comisiones sobre el fondo del asunto o que el procedimiento, la información suficiente sobre las disposiciones del proyecto de ley en discusión, que, como consecuencia La denuncia de hechos no alegados;

- LOS ARTÍCULOS 5 Y 11:

4. Teniendo en cuenta, en primer lugar, que el artículo 5 de la Ley mencionada crea el capítulo I del Título III del Libro III de la Parte I del Código de la Propiedad Intelectual la sección 3 con los artículos L. L. 331-12 331-45, que se dedica a la Alta Autoridad para la difusión de las obras y la protección de los derechos en Internet "que esta nueva autoridad administrativa independiente está formado por la universidad y una comisión para la protección de los derechos, que el la universidad es responsable de promover la disponibilidad de obras jurídicas y objetos a los que se adjunta un derecho de autor o derecho conexo, que la protección de los derechos es la aplicación de nuevas sanciones y mecanismos de alerta los titulares administrativos de acceso a Internet que han fracasado a la vigilancia de este acceso;

5. Considerando que, por otra parte, el artículo 11 añade, en el capítulo IV del mismo título, los artículos L. 336-3 y L. 336-4, que define el deber de vigilancia del acceso a Internet y definir los casos en los que está exento de pena el titular de la suscripción a Internet para que el acceso ha sido utilizado por infringir a los derechos de propiedad intelectual;

. En cuanto a la obligación de vigilar el acceso a la Internet:

6. Considerando que en virtud del párrafo primero del artículo L. 336-3 del Código de la Propiedad Intelectual: "El titular de acceso a los servicios de comunicación en línea para el público tiene la obligación de garantizar que el acceso no está siendo utilizado para fines de reproducción, representación, o puesta a disposición de la comunicación pública de obras u objetos protegidos por derechos de autor o un derecho conexo sin la autorización de los titulares de derechos de autor en virtud de los libros I y II, cuando es necesario ";

7. Teniendo en cuenta que, contrariamente a lo que los demandantes, la definición de esa obligación es distinta de la del delito de falsificación, que está redactado en términos lo suficientemente claros y precisos, y que, por consiguiente, en la promulgación, el legislador ha fallado o el poder que deriva del artículo 34 de la Constitución, ni el objetivo constitucional de inteligibilidad y accesibilidad de la ley;

. En lo que respecta a la represión de las infracciones del deber de supervisión:

8. Teniendo en cuenta, en primer lugar, que con arreglo a los apartados 2 a 6 del artículo L. 336-3: “Ninguna sanción se puede tomar en relación con el titular del acceso en los siguientes casos:

“1 ° Si el titular de la ha puesto en marcha un acceso de la seguridad en la lista mencionada en el párrafo segundo del artículo L. 331-32;

“2 ° Si la infracción a que se refiere el primer párrafo de esta sección es una persona que utiliza fraudulentamente el servicio de acceso a la comunicación al público en línea;

“3 ° En caso de fuerza mayor.

“El hecho de que el titular de acceso a la obligación establecida en el primer párrafo no excluye la responsabilidad penal de la persona en cuestión.”

9. Considerando que, por otra parte, los términos del artículo L. 331-27: “Si se comprueba que el cliente ha incumplido la obligación establecida en el artículo L. 336-3 en el año siguiente a la recepción de una recomendación de la Comisión sobre la Protección de los Derechos y con una carta de renuncia en contra de una firma u otros medios de prueba para establecer la fecha de envío de esta recomendación y la de su recepción por el cliente, la comisión podrá, después de un procedimiento, decisión, de acuerdo con la gravedad de los incumplimientos, y la utilización de acceso, una de las siguientes sanciones:

“1 ° La suspensión del acceso al servicio por un período de dos meses a un año, con la imposibilidad de que el abonado, para suscribir el mismo período, otro contrato para el acceso a un servicio de comunicación al público en línea en cualquier operador;

“2 ° Un requerimiento judicial para que adopte, en un plazo que ella determine, medidas para impedir la renovación del fallo, incluidos los de seguridad que aparece en la lista que figura en el párrafo segundo del artículo L. 331-32 y que informe a la Alta Autoridad, en su caso de la pena “;

10. Considerando que, de conformidad con el artículo L. 331-28, el Comité de Protección de los Derechos de la Alta Autoridad, antes de iniciar un procedimiento de sanción, ofrecer al cliente una transacción que consiste en una suspensión, ya sea de acceso a Internet para uno a tres meses, un obligación de adoptar medidas para evitar la repetición de la violación, que el artículo L. 331-29 autoriza a la Comisión para imponer las sanciones previstas en el artículo L. 331-27 por el incumplimiento de la transacción, que el artículo L. 331-30 especifica las consecuencias contractuales de la suspensión del servicio de acceso; que el artículo L. 331-31 especifica las condiciones en las que el proveedor de acceso es necesario para aplicar la suspensión, que el artículo L. 331-32 determinar cómo es la lista de las formas de asegurar la aplicación de que exime al titular el acceso a cualquier pena que los artículos L. 331-33 y L. 331-34 establecer un listado de directorio nacional de personas que han sido una suspensión, mientras que el artículo L. 331-36 permite la comisión de proteger los derechos a conservar, al menos hasta que la suspensión del acceso se ha aplicado plenamente, los datos técnicos que han sido puestos a su disposición;

11. Considerando que, según las demandantes, que una autoridad administrativa, incluso independiente de los poderes de sanción a suspender el acceso a Internet, el

poder legislativo, por una parte, ignoró el carácter fundamental del derecho a la libertad de expresión y comunicación y, en segundo lugar, las sanciones se establece claramente, sostienen además que las condiciones de esta represión, establece una presunción de culpabilidad y tener una grave violación de los derechos de defensa;

12. Considerando que en virtud del artículo 11 de la Declaración sobre los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789: “La libre comunicación de pensamientos y opiniones es uno de los más preciosos derechos del hombre: todo ciudadano puede, por tanto, hablar, escribir e imprimir libremente, salvo para responder a los abusos de esta libertad en los casos determinados por la ley “que los actuales medios de comunicación y teniendo en cuenta el desarrollo generalizado de los servicios de comunicación al público línea y la importancia de estos servicios para la participación en la vida democrática y la expresión de ideas y opiniones, este derecho incluye la libertad de acceder a estos servicios;

13. Teniendo en cuenta que la propiedad es el número de los derechos humanos consagrados en los artículos 2 y 17 de la Declaración de 1789, como los propósitos y condiciones para el ejercicio del derecho de propiedad desde 1789 han experimentado una evolución caracterizada por una extensión de su ámbito de aplicación a nuevas áreas, que, entre estos, es el derecho de los titulares de los derechos de autor y derechos conexos, a gozar de sus derechos de propiedad intelectual y protegerlos en el marco definido por la ley y los compromisos internacionales de Francia, que la lucha contra la falsificación de las prácticas que prosperan en Internet cumple el objetivo de salvaguardar la propiedad intelectual;

14. Considerando que el principio de separación de poderes, ni ningún principio o regla de valor constitucional, es un impedimento a una autoridad administrativa, en el marco de competencias de la autoridad pública, puede ejercer un poder de sanción en la medida necesaria para cumplir su misión cuando el ejercicio de esta facultad va acompañado de la ley de medidas para proteger los derechos y libertades garantizados por la Constitución, en particular, debe respetarse el principio de legalidad infracciones y sanciones y los derechos de defensa, los principios se aplican a cualquier sanción en la naturaleza de la pena, incluso si el legislador ha dejado a la decisión de una autoridad no judicial en la naturaleza;

15. Considerando que de conformidad con el artículo 34 de la Constitución: “La ley establece normas sobre los derechos civiles ... y las garantías fundamentales concedidas a los ciudadanos para el ejercicio de las libertades públicas” que, sobre esta base, está abierto al Parlamento a promulgar las normas para conciliar la búsqueda del objetivo de lucha contra las prácticas de falsificación en la Internet con el derecho de libre comunicación y la libertad de hablar, escribir e imprimir, que Sin embargo, la libertad de expresión y comunicación es tanto más valiosa que su ejercicio es un requisito previo para la democracia y una de las garantías de respeto de otros derechos y libertades y que los ataques contra el ejercicio de esta libertad deben ser necesarias, adecuadas y proporcionadas al objetivo perseguido;

16. Considerando que los poderes de sanción impuestas por las disposiciones facultan a la comisión encargada de proteger los derechos, que no es un tribunal, para restringir o impedir el acceso a Internet de suscripción y los titulares de las personas que son elegibles y que la competencia de la autoridad administrativa no se limita a una categoría particular de personas, sino que se extiende a toda la población y que sus competencias pueden llevar a restringir el ejercicio por cualquier persona, su derecho a expresarse y comunicarse libremente, sobre todo desde su casa y que, en estas circunstancias, teniendo en cuenta la naturaleza de la libertad garantizada por el artículo

11 de la Declaración de 1789, el legislador no puede, sea cual sea salvaguardias que rigen la imposición de sanciones, encomendar dichas facultades a una autoridad administrativa con el fin de proteger los derechos de los titulares de los derechos de autor y derechos conexos;

17. Considerando, además, que en virtud del artículo 9 de la Declaración de 1789, todo hombre se presume inocente mientras no se pruebe su culpabilidad, se desprende que, en principio, la legislatura no establece una presunción de culpabilidad en materia penal, sin embargo, en circunstancias excepcionales, tales presunciones pueden ser establecidas, en particular con respecto contraventionnelle ya que no son de carácter concluyente, que garantice los derechos de los defensa de los hechos y llevar una probabilidad razonable de que la rendición de cuentas;

18. Considerando que, en este caso, se desprende de las disposiciones contempladas en la realización de un acto de infracción de la dirección de Internet del abonado, de acuerdo con los términos del segundo párrafo del artículo L. 331-21, “lo esencial de las infracciones de la obligación establecida en el artículo L. 336-3” que sólo el titular del contrato de suscripción de acceso a Internet pueden estar sujetos a las sanciones impuestas por el dispositivo remitidos; que, para eludir las sanciones, que, en virtud del artículo L. 331-38, de presentar pruebas para demostrar que la infracción de los derechos de autor o derechos afines a los derechos es parte del fraude de una tercera persona sólo, a cargo de una inversión de la carga de la prueba, Artículo L. 331-38 establece, en contra de los requisitos del artículo 9 de la Declaración de 1789, una presunción de culpabilidad contra el titular de acceso a Internet, podría conducir a la imposición de sanciones contra la privación o restricción de la ley;

19. Considerando que, en consecuencia, sin que sea necesario examinar los demás cargos que deben ser declaradas contrarias a la Constitución, en el artículo 11 de la ley a que se refiere, el segundo a quinto párrafos del Artículo L. 336-3 y el artículo 5, los artículos L. L. 331-27 331-31, L. 331-33 y L. 331-34, es el mismo en el segundo párrafo del artículo L. 331-21, las palabras “y encontrar el material de las infracciones de la obligación establecida en el artículo L. 336-3, el último párrafo del artículo L. 331-26, y las palabras: “Para ser considerados, en su opinión, tan válida la exención de la responsabilidad del titular de acceso en virtud del artículo L. 336-3” en el primer párrafo del artículo L. 331-32 y las palabras “la aplicación de la que exime al titular de un acceso válido su responsabilidad en virtud del artículo L. 336-3” en el segundo párrafo de dicho artículo;

20. Teniendo en cuenta que también debe ser declarada contraria a la Constitución, ya que no son separables, el artículo 5, las palabras “y la advertencia de sanciones en caso de renovación de fracaso” en primer párrafo del artículo L. 331-26, las palabras “y los recursos de que disponen en virtud de los artículos L. 331-26 a L. 331-31 y L. 331-33” en el artículo L. 331-35, de las palabras “y, más tarde, hasta la suspensión de acceso previstas por estas disposiciones se ha aplicado plenamente” en el primer párrafo del artículo L. 331-36 y el segundo párrafo del presente artículo, las palabras “y de la nacional a que se refiere el artículo L. 331-33, que permite a las personas cuya actividad es proporcionar acceso a un servicio de comunicación a disposición del público en línea en forma de una simple consulta, la información estrictamente necesaria para llevar a cabo una auditoría de conformidad con este artículo “en el artículo L. 331-37, y el segundo párrafo del artículo L. 331-38, que el mismo, el artículo 16, las palabras “violación de la obligación establecida en el artículo L. 336-3 del Código de la Propiedad Intelectual y, así como I y V del artículo 19;

. En lo que respecta al derecho a la intimidad:

21. Considerando que, según las demandantes, la ley establece una conciliación se refiere claramente desequilibrada entre la protección de los derechos de autor y el derecho a la intimidad, que el objetivo perseguido por el legislador requiere la aplicación de medidas de vigilancia los ciudadanos y el establecimiento de un “control general de las comunicaciones electrónicas” incompatible con la exigencia constitucional del derecho a la intimidad, que los peticionarios argumentan que las competencias otorgadas a los agentes privados autorizados para recoger las direcciones de suscriptores sospechosos de haber compartido una lista de obras protegidas, no son compatibles con las garantías suficientes;

22. Teniendo en cuenta, en primer lugar, que en virtud del artículo 2 de la Declaración de 1789: “El objetivo de toda asociación política es la conservación de los derechos naturales e inalienables del hombre. Estos derechos son la libertad, la propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión “, que proclamó la libertad para este artículo implica el respeto de la intimidad;

23. Considerando, en segundo lugar, corresponde al legislador, en virtud del artículo 34 de la Constitución, para establecer las normas sobre las garantías fundamentales concedidas a los ciudadanos para el ejercicio de las libertades civiles, es de garantizar el equilibrio entre el respeto de la intimidad y otros preceptos constitucionales, tales como la protección de los derechos de propiedad;

24. Considerando que de conformidad con el artículo L. 331-24 del Código de Propiedad Intelectual, el Comité de protección de los derechos afecta a la remisión de agentes jurados y aprobado en las condiciones definidas en el artículo L. 331-2 del Código, que son designados por la defensa profesional de las empresas para la recolección y distribución de derechos o por el Centro Nacional de Cinematografía;

25. Considerando que en virtud del artículo 9 de la Ley de 6 de enero de 1978 antes mencionada: “El tratamiento de datos personales relativos a los delitos, y las medidas de seguridad pueden ser implementados por: ... 4 ° las personas jurídicas mencionadas en los artículos L. 321-1 y L. 331-1 del Código de Propiedad Intelectual, en virtud de los derechos que gestiona o en nombre de las víctimas de los derechos enunciados en los libros I, II y III del Código de garantizar la protección de los derechos humanos “que estas personas fueron la recopilación y distribución de derechos y organizaciones de defensa constituido regularmente y profesional;

26. Considerando que las disposiciones del artículo L. 34-1 del Código de Correos y Comunicaciones Electrónicas, modificado por el artículo 14 de la ley a que se refiere, el tercer y quinto párrafos del artículo L. 331-21 del Código de la Propiedad Intelectual y el artículo L. 331-24 que alteran los fines para los cuales los beneficiarios podrán aplicar tratamientos en los datos relativos a los delitos, sino que permiten que, ahora, los datos recogidos y el desarrollo de un nombre en el procedimiento incoado ante el Comité de protección de los derechos;

27. Considerando que la lucha contra la falsificación de prácticas en Internet, cumple el objetivo de salvaguardar la propiedad intelectual y la creación cultural, no obstante, la autorización otorgada a particulares para recoger datos para determinar indirectamente la titulares el acceso a los servicios de comunicación al público de acuerdo dio lugar a la aplicación de estas personas, el tratamiento de datos personales relativos a los delitos, tal consentimiento no puede, sin una parte desproporcionada del derecho a la vida privada, tiene otros fines para que los titulares del derecho de autor y derechos afines a los derechos a ejercer los recursos a disposición de cualquier persona o entidad con respecto a los delitos de los cuales ella era la víctima;

28. Considerando que, como resultado de la censura como consecuencia de los considerandos 19 y 20, la protección de los derechos no puede imponer las sanciones mencionadas, sólo un requisito previo para un proceso judicial se confía a él, que es justificada por la magnitud de la falsificación cometida a través de Internet y la utilidad en el interés de una buena administración de justicia, a fin de limitar el número de delitos para los cuales la autoridad judicial, se entró, se que muestran que el tratamiento de datos personales aplicado por las empresas y organismos mencionados anteriormente y la transmisión de datos a la comisión para la protección de los derechos para el desempeño de sus tareas se encuentran en proceso de remisión a los tribunales competentes ;

29. Teniendo en cuenta que estos tratamientos estarán sujetos a los requisitos en virtud de la Ley de 6 de enero de 1978 antes mencionada, que los datos pueden ser transmitidos a las autoridades administrativas o judiciales, será de la Commission Nationale de l'Informatique et des libertades, a fin de permitir la incautación de dicho tratamiento, a fin de garantizar que las modalidades de su aplicación, incluyendo las condiciones de retención, será estrictamente proporcional a ese fin;

30. Considerando también que, contrariamente a lo que los demandantes, agentes jurados a que se refiere el artículo L. 331-24 del Código de la propiedad intelectual no están facultados para supervisar o interceptar la correspondencia privada o comercial;

31. Considerando que se desprende de lo anterior que, en virtud de lo dispuesto en el párrafo 29, la aplicación de este tratamiento de datos personales no hacer caso omiso de los requisitos constitucionales supra;

. En cuanto a la referencia a los decretos en el Consejo de Estado:

32. Considerando que, según las demandantes, en referencia a un decreto la tarea de especificar las condiciones en las que la Alta Autoridad puede asignar una etiqueta de "para identificar claramente la legalidad" de la oferta de servicios de comunicación en línea, sección L . 331-23 del Código de Propiedad Intelectual para permitir a la Alta Autoridad de la facultad discrecional para determinar las ofertas que, según la naturaleza estatutaria, que los demandantes añaden que el artículo L. 331-32 no podía referirse al decreto para determinar el procedimiento de evaluación y certificación de los medios de garantizar el acceso a Internet, al hacerlo, el legislador no ha ejercido el poder que se deriva de artículo 34 de la Constitución en lo que respecta a las garantías fundamentales reconocidas a los ciudadanos el ejercicio de sus libertades civiles;

33. Considerando que, si el artículo 34 de la Constitución establece que "la ley establece normas sobre las garantías fundamentales ... concede a los ciudadanos para el ejercicio de las libertades públicas", la aplicación de las garantías determinadas por el legislador en el marco del ejecutivo, que las disposiciones del artículo 21 de la Constitución, que el Primer Ministro con la tarea de hacer cumplir las leyes y, con sujeción a las disposiciones del artículo 13 para ejercer la potestad reglamentaria, no no impedirá que el legislador encomendó a una autoridad pública distinta de la Primer Ministro de establecer normas para la aplicación de los principios establecidos por la ley, siempre que esta autorización se refiere únicamente a medidas limitadas, tanto en el campo aplicación y en el contenido, que dicha jurisdicción no exime al cumplimiento de la normativa de los preceptos constitucionales;

34. Considerando que el etiquetado de "legalidad" de la prestación de servicios de comunicaciones al público en línea con el único propósito de promover la identificación por el público, las ofertas de servicio respeta los derechos de propiedad intelectual resultantes el segundo párrafo del artículo L. 331-23 que recibe una solicitud de una etiqueta, la Alta Autoridad se verá obligado a responder de manera positiva si se

considera que los servicios ofrecidos por esta oferta no infrinja los derechos de los los derechos de autor o derechos conexos, que la referencia al decreto para establecer las condiciones para la concesión de una etiqueta con el único propósito de determinar la manera en que las solicitudes de certificación serán recibidas e investigadas por la Alta Autoridad, y que estas disposiciones no confieren no poder arbitrario;

35. Considerando que, en su edición de la censura como consecuencia de los considerandos 19 y 20, el artículo L. 331-32, con el único fin de promover el uso de los medios de garantizar la aplicación de lo que asegura el control de acceso a Internet de conformidad con las disposiciones del artículo L. 336-3, que es la autoridad para definir las condiciones en que esta etiqueta se publicará, se desprende que las disposiciones de los artículos 5 y 11 de la Ley mencionada, con excepción de las declaradas contrarias a la Constitución, no afectado por la incompetencia negativo;

SOBRE EL ARTÍCULO 10:

36. Considerando que el artículo 10 de la Ley da una nueva redacción del artículo L. 336-2 del Código de Propiedad Intelectual, de acuerdo con dicho artículo: “En presencia de una infracción de un derecho de autor o un derecho conexo causado por el contenido de un servicio de comunicación al público en línea El tribunal, actuando en su caso en forma de ayuda de emergencia, podrá ordenar, a petición de los titulares de derechos sobre las obras protegidas y los objetos, las personas a su cargo, las sociedades de gestión colectiva y la distribución de los derechos a que se refiere el artículo L. 321-1 o profesional organizaciones de defensa a que se refiere el artículo L. 331-1, las medidas para prevenir o detener la infracción de los derechos de autor o derechos afines en la contra cualquier persona que pueda contribuir a su solución “;

37. Considerando que, de acuerdo a los demandantes la oportunidad de bloquear, a través de medidas y órdenes, el funcionamiento de la infraestructura de telecomunicaciones ... podría privar a muchos usuarios de Internet el derecho a recibir información e ideas “que «Además, excesivamente amplio e incierto de la disposición podría dar lugar personas que podrían estar cubiertas por el artículo 10 para restringir, como medida preventiva, el acceso a la Internet;

38. Teniendo en cuenta que permite a los propietarios de los derechos de autor o derechos conexos, y las personas encargadas de representarlas en la defensa de estos derechos a la petición de que el Alto Tribunal para, a raíz de una procedimiento, las medidas necesarias para prevenir o detener la violación de sus derechos, el legislador no ha violado la libertad de expresión y la comunicación, será el tribunal para decidir, de conformidad con el presente libertad, sólo las medidas estrictamente necesarias para la preservación de los derechos en cuestión y que esta reserva, el artículo 10 no viola la Constitución;

39. Teniendo en cuenta que hay lugar para la oficina constitucional de plantear cualquier cuestión de cumplimiento de la Constitución,

DE C I D E

.- En primer lugar el artículo deberá ser declarada contraria a la Constitución las siguientes disposiciones del Código de la Propiedad Intelectual, como consecuencia de los artículos 5 y 11 de la ley que promueve la difusión y la protección de la creación en Internet:

- En el párrafo segundo del artículo L. 331-21, las palabras “y encontrar el material de las infracciones de la obligación establecida en el artículo L. 336-3;

- En el primer párrafo del artículo L. 331-26, de las palabras “y la advertencia de sanciones en caso de renovación de un fracaso”;

- El último párrafo del artículo L. 331-26;

- Los artículos L. L. 331-27 331-31;
- En el primer párrafo del artículo L. 331-32, de las palabras “a considerar, en su opinión, tan válida la exención de la responsabilidad del titular el acceso a la conformidad con el artículo L. 336-3;
- En el segundo párrafo de dicho artículo, las palabras “la aplicación de la que exime al titular de un acceso válido su responsabilidad en virtud del artículo L. 336-3;
- Los artículos L. 331-33 y L. 331-34;
- Artículo L. 331-35, las palabras “y los recursos de que disponen en virtud de los artículos L. 331-26 a L. 331-31 y L. 331-33;
- Artículo L. 331-36, de las palabras “y, más tarde, hasta la suspensión de acceso previstas por estas disposiciones se ha aplicado plenamente” en el párrafo primero y el segundo párrafo;
- En el párrafo segundo del artículo L. 331-37, las palabras “y de la nacional a que se refiere el artículo L. 331-33, que permite a las personas cuya actividad es proporcionar acceso a un servicio de comunicación al público en línea en forma de una simple consulta, la información estrictamente necesaria para la verificación prevista por este artículo “;
- El segundo párrafo del artículo L. 331-38;
- El segundo a quinto párrafos del artículo L. 336-3.

Lo mismo puede decirse de las palabras “violación de la obligación establecida en el artículo L. 336-3 del Código de la Propiedad Intelectual y” en el artículo 16 de la ley, así como I y V del artículo 19.

Artículo 2 .- En el primer párrafo del artículo L. 331-17 del Código, como se deduce del artículo 5 de la Ley, las palabras: “artículos L. 331-26 a L. 331-31 y el artículo L. 331-33” se sustituirán por las palabras “en el artículo L. 331-26.

Artículo 3 .- En las reservas contenidas en los párrafos 29 y 38, el artículo 10 de la Ley, y el excedente de los artículos 5, 11, 16 y 19, no son inconstitucionales.

Artículo 4 .- La presente Decisión se publicará en el Diario Oficial de la República Francesa.

Deliberado por el Consejo Constitucional en su reunión de 10 de junio de 2009, Sábado donde el Sr. Jean-Louis Debré, Presidente, MM. Guy Canivet, Jacques Chirac, Renaud Denoix de Saint Marc, Olivier de LAMOTHE DUTHEILLET, la Sra. Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. JOXE Pierre y Jean-Louis PEZANT, la Sra. Dominique Schnapper y Pierre Steinmetz.

Publicación en el Diario Oficial de 13 de junio de 2009, p. 9675

Rec. (pendiente de publicación)

Enlace al texto de la Ley enjuiciada

http://ameli.senat.fr/publication_pl/2008-2009/397.html